

REPÚBLICA DE COLOMBIA**RAMA JUDICIAL****TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN****SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**

Medellín, veintinueve (29) de abril de dos mil veintiuno (2021)

Cumplido el traslado de que trata el artículo 15 del Decreto 806 de 2020, se procede a dictar la sentencia que corresponde en este proceso ordinario de doble instancia instaurado por MARÍA LEONOR MARTÍNEZ GUTIÉRREZ en contra de COLPENSIONES (Radicado 05001-31-05-021-2018-00381-01).

ANTECEDENTES

La promotora solicitó se condene a Colpensiones a reconocerle y pagarle una pensión de vejez por ser beneficiaria del régimen de transición, con indexación y las costas del proceso (fl 1 vto.).

Aspiraciones que sustentó así: Nació el 29 de abril de 1959; cotizó al sistema de pensiones a través de entidades públicas y privadas, alcanzando más de 500 cotizaciones en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima, y más de 1.000 en toda la vida. Reclamó la prestación a la pasiva el 26 de marzo de 2018, pero le fue negada en la Resolución SUB 165012 del 22 de junio de ese mismo año (fls 1-2).

Colpensiones sobre los hechos expuso que debían acreditarse en el trámite. Se opuso a las pretensiones y propuso como excepciones las que denominó: inexistencia de la obligación de reconocer la pensión de vejez a la demandante conforme al régimen de transición, improcedencia del pago de

intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, improcedencia de reconocimiento sin descuentos en salud, improcedencia de la indexación, prescripción, buena fe, imposibilidad de condena en costas y compensación (fls 38-51).

El Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín (Ant.), en sentencia del 21 de mayo de 2020, tras considerar que la fecha de entrada en vigencia de la demandante fue el 30 de junio de 1995, y en consecuencia le era aplicable la Ley 71 de 1988, condenó a Colpensiones a pagar la pensión mínima de ese estatuto a partir del 27 de marzo de 2015, por efectos de la prescripción. Dijo que si bien con posterioridad aparecen aportes con el régimen subsidiado, estos no deben tenerse en cuenta, dado que su base fue el SMLMV, y se pagaron luego del cumplimiento de los requisitos pensionales. Liquidó un retroactivo hasta el 30 de abril de 2020, por trece mesadas anuales, en \$49.515.502, monto que deberá ser indexado por la pasiva, autorizándole los descuentos con destino al sistema de seguridad social en salud. Costas de primer grado a cargo de Colpensiones, fijando como agencias en derecho \$1.485.465 (archivo 02 CD del folio 88).

La demandada aspira a que se revoque la condena al retroactivo y a las costas de primera instancia: lo primero dado que el disfrute de la pensión debió ubicarse en el último ciclo cotizado, así hubiese sido a través de Colombia Mayor, sobre todo porque en este caso no medió inducción en error; y lo segundo, atendiendo a un criterio subjetivo, en la medida que el litigio pudo evitarse, si la demandante hubiera aportado los certificados de tiempo de servicio público, como se requirió en el acto administrativo que negó la pensión, pero así no lo hizo, esos documentos solo se presentaron durante el trámite del proceso.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

CONSIDERACIONES

Conforme a las pruebas allegadas al proceso, es necesario resaltar que en esta instancia se encuentran por fuera de discusión los siguientes presupuestos fácticos: 1) La demandante nació el 29 de abril de 1959; 2) Aportó al sistema de seguridad social en pensiones a través de Colpensiones, a partir del 1º de julio de 1995 con el Municipio de San Luis; a partir de febrero de 2009 como trabajadora independiente, y desde febrero de 2011 hasta junio de 2018, a través del régimen subsidiado, un total de 588,86 semanas cotizadas (fls 61 a 63); 3) Además cuenta con tiempos públicos aportados a la Caja de Municipal de Previsión y Seguridad Social, con el mismo municipio: entre el 3 de noviembre de 1984 y el 30 de junio de 1995; y entre el 1º de junio de 1998 y el 31 de diciembre de 2000, descontando los periodos simultáneos, lapsos equivalentes a 4.821 días, que computan 688,71 semanas (fls 69 a 77); y 4) Reclamó la pensión el 27 de marzo de 2018, pero le fue negada el 22 de junio de ese año, a través del acto administrativo SUB165012 (fls 4 a 6)

De acuerdo a lo descrito, teniendo en cuenta el recurso vertical, y las condenas a revisar en el grado de Consulta que se surtirá en favor de la demandada, corresponde a la Sala determinar si la demandante es beneficiaria del régimen de transición y de la Ley 71 de 1988, si causó la pensión de vejez de ese estatuto, y cuando principia su disfrute; si era viable imponer la indexación, y si Colpensiones debe asumir las costas de la primera instancia.

Pues bien, como se sabe: I) El artículo 36 de la Ley 100, señaló que quienes a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones, tuvieran en el caso de las mujeres, 35 años o 15 años de tiempo de servicio o su equivalente en semanas cotizadas, tendrán derecho a la pensión de vejez con base en los requisitos del régimen anterior al que venían afiliados, en tres ítems: edad, tiempo de servicio o semanas cotizadas, y monto o tasa de reemplazo. II) La fecha de entrada en vigencia del sistema general varía entre el 1º de abril de 1994, o el 30 de junio de 1995 o la data que determine

la entidad territorial; la primera fecha aplica para los trabajadores del sector privado y público nacional, y la segunda, para los servidores públicos del nivel departamental, municipal y distrital (art 151 Ley 100); III) El régimen de transición perdió su vigencia el 31 de julio de 2010, excepto para los ciudadanos que al 29 de julio de 2005 contaran con 750 semanas cotizadas, a quienes se les extendió ese beneficio hasta el 31 de diciembre de 2014 (parágrafo transitorio 4 art 1º Acto Legislativo 01 de 2005); y IV) Los requisitos previstos en el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, para causar una pensión son: 2 décadas entre tiempo de servicio público aportado o no cajas y cotizaciones a través de empleadores privados al ISS (a partir de la Sentencia del órgano de cierre SL4457 de 2014), y 55 años de edad, en el caso de las mujeres.

Con base en esos presupuestos, se analiza el sub lite, encontrando que la fecha de entrada en vigencia del sistema general de pensiones para la activa, lo fue el 30 de junio de 1995, ya que, antes y después de esa fecha estuvo vinculada al Municipio de San Luis (Ant), y para esa data contaba con más de 35 años, porque esa edad la cumplió el 29 de abril de 1994 (fl 12). En esas circunstancias es beneficiaria del régimen de transición, beneficio que se le extendió hasta el 31 de diciembre de 2014, en la medida que entre tiempo público y privado, cotizado y aportado, al 29 de julio de 2005, logró 801,99 semanas, conforme a los elementos fácticos indiscutidos.

En esa línea, su régimen anterior era el previsto en la Ley 71 de 1988, del que cumplió las exigencias para causar la prestación, el 29 de abril de 2014: allí arribó a los 55 años, y acumulaba 1.084,56 semanas con la sumatoria de tiempos planteada, es decir, había laborado por más de 20 años.

Desde esa perspectiva, debe confirmarse la sentencia de primera instancia, en tanto el reconocimiento de la pensión a la demandante, se ajusta a derecho. Sin embargo, tiene razón la censura en cuanto a que el disfrute de la prestación no debió ubicarse al momento del cumplimiento de los requisitos: **primero**, porque en estos casos son aplicables los artículos 13 y 35 del Decreto 758 de 1990, según los cuales para que inicie el pago de la pensión es necesario el retiro o la desafiliación del sistema; **segundo**, porque

Martínez Gutiérrez continuó realizando aportes a través del régimen subsidiado hasta junio de 2018, según se observa del historial laboral de folios 61 a 63; **tercero**, porque esos aportes los hizo de manera voluntaria, no puede decirse que fueron corolario de una directriz de Colpensiones al respecto, en otras palabras, no puede predicarse inducción a error en este evento, dado que la reclamación fue presentada el 27 de marzo de 2018, y la negativa expedida en sede administrativa por la entidad, le fue notificada, el 3 de julio de 2018 (archivo digital GEN-RES-CO-2018_7673949-20180703115100 del expediente administrativo visible en el folio 85), esto es, 3 días después del momento en que dejó de cotizar; y **cuarto**, porque la jurisprudencia en forma pacífica ha sostenido que no existe razón alguna para negar la validez de las semanas cotizadas al régimen subsidiado, por lo que es deber de las administradoras reconocer hasta la última cotización, *“...por manera que, los aportes realizados con posterioridad al momento en que el afiliado cumple los requisitos para la pensión solo podrán ser desestimados si tales cotizaciones, se insiste, posteriores a la causación del derecho, se han efectuado con un salario inferior que reduciría ostensiblemente el ingreso base de liquidación...”* (Ver sentencias SL843 de 2013, SL4542 de 2018, y SL4258 de 2020), y en el sub examine, los aportes antes y después de la fecha en que se completaron los requisitos pensionales, son equivalentes al SMLMV, así el efecto de tener en cuenta los pagados después del 29 de abril de 2014, no es la disminución ostensible del IBL.

En ese sentido, debe iniciarse el pago de la pensión mínima (por fuera de discusión), a partir del 1º de julio de 2018, causándose un retroactivo desde allí, y hasta el 31 de marzo de la calenda que avanza igual a **\$30.371.219**, que se obtuvo al contabilizar 13 mesadas por año, según los presupuestos del Acto Legislativo 01 de 2005. A partir del 1º de abril de 2021, la mesada es igual a \$908.526, sin perjuicio de los incrementos de ley. De esta forma, se modificará la sentencia cuestionada, pero manteniendo eso sí, la imposición de la indexación sobre las mesadas causadas, dada la notoria pérdida del poder adquisitivo de la moneda; y la autorización para descontar los aportes al sistema de seguridad social en salud, en cumplimiento de las normas vigentes sobre la materia. Las mesadas no se vieron afectadas por

la prescripción, dado que, desde el inicio de su pago hasta la presentación de la demanda, el 17 de julio de 2018, no transcurrió el plazo trienal previsto en el artículo 151 del CPT y de la SS.

AÑO	SALARIO MÍNIMO	MESADAS	TOTAL	TOTAL MÍNIMO
2018	\$ 781.242	7	\$ 0	\$ 5.468.694
2019	\$ 828.116	13	\$ 0	\$ 10.765.508
2020	\$ 877.803	13	\$ 0	\$ 11.411.439
2021	\$ 908.526	3	\$ 0	\$ 2.725.578
		TOTAL	\$ 0	\$ 30.371.219

Finalmente, siguiendo los lineamientos del artículo 365 del CGP, que impone la aplicación de un criterio objetivo para la asignación de las costas, que consiste en que aquellas corren por cuenta de la parte vencida en el proceso, no es viable absolver de las aplicadas por el juzgado a Colpensiones, dado que dicha entidad se opuso a las pretensiones y todas salieron adelante.

Sin costas en esta instancia por la prosperidad parcial del recurso de apelación.


DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **CONFIRMA** la sentencia que se revisa por vía de apelación y consulta, de fecha y procedencia conocidas, en cuanto otorgó el derecho a la pensión de vejez a la demandante con base en el régimen de transición y la Ley 71 de 1988, pero la **MODIFICA** en cuanto al disfrute de la prestación a partir del 1º de julio de 2018. Por lo tanto, **COLPENSIONES** deberá pagar a **MARÍA LEONOR MARTÍNEZ GUTIÉRREZ**, un retroactivo causado desde esa fecha y hasta el 31 de marzo de 2021, igual a **\$30.371.219**. A partir del 1º de abril de 2021, la mesada es igual a **\$908.526**, sin perjuicio de los incrementos de ley.

Sin costas en esta instancia.

La presente decisión queda notificada en los **ESTADOS ELECTRÓNICOS** de que trata el artículo 9 del Decreto 806 de 2020.

Los Magistrados,



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



NANCY GUTIERREZ SALAZAR

Se certifica: Que la sentencia anterior fue notificada por
ESTADOS N° 73 fijados el 30 de abril de 2021
En la página web de la rama judicial a las 8 a.m.

El secretario